

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, tiene como finalidad realizar un breve análisis en relación a la Reforma Político Electoral del año 2014, en lo referente con la competencia entre la autoridad electoral Nacional, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Locales, los Organismos Públicos Locales Electorales.

Los alcances de la Reforma que sufre el sistema electoral en nuestro país, comprende desde la división de funciones en los procesos electorales locales, incluso refiere la modalidad de elecciones concurrentes, es decir, existe una participación conjunta en la organización de elecciones federales y locales.

Ahora bien esta organización de elecciones requiere de más que una buena coordinación, lo realmente importante es contar con los elementos jurídicos que permitan dotar de legalidad dichos actos, que cumplan con los principios rectores de la función electoral, como lo son la legalidad y certeza.

De lo antes mencionado, el presente análisis pretende ir de la parte operativa, todo lo referente con la preparación de un proceso electoral desde la óptica de la coordinación de funciones ente el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, pasando evidente por el tema de casilla única, que es una de las novedades de la reforma electoral; de igual forma desde el punto de vista jurídico en relación a cada una de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por supuesto la legislación local de los Estados.

El presente estudio solo será una fracción del análisis integral que conlleva la presente materia, tomando en consideración la complejidad del tema, en razón del amplio contexto electoral del país, así como el análisis de cada una de las legislaciones locales.

Sin más preámbulos, daremos inicio con esta interesante tarea.

LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL.

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política, en el artículo 41 apartado B, corresponde al Instituto Nacional Electoral las siguientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

- 1. La capacitación electoral;*
- 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;*
- 3. El padrón y la lista de electores;*
- 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;*
- 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;*
- 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y*
- 7. Las demás que determine la ley.*

b) Para los procesos electorales federales:

- 1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. La preparación de la jornada electoral;*
- 3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;*

6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y

7. Las demás que determine la ley.¹

En primer término, analizaremos lo referente a la Capacitación Electoral, en el siguiente esquema:

1.- Una de las razones que dieron origen a otorgar al INE la capacitación electoral, radica en que esta es una de las funciones con mayor responsabilidad y de gran trascendencia para el proceso electoral, aunado a la implementación de la casilla única, el cual es una de las innovaciones de la Reforma electoral.

En lo que respecta a la capacitación y la instalación de las mesas directivas de casilla, es importante mencionar la intromisión de los Partidos Políticos, quienes en el afán de contar con una ventaja ante los demás, pretenden involucrar a ciudadanos afines a sus colores, para contar con presencia el día de la jornada; razón por la cual la reforma al pretender abatir dicha práctica, deja la atribución directa al INE, el cual en su afán paternalista, lo cual en mi particular punto de vista es una práctica que difícilmente se podrá combatir, tomando en consideración que hace existe una decadente concientización ante la ciudadanía, es decir, es importante fortalecer la educación cívica en la población, para que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos, así como la importancia de participar en los proceso electorales de manera activa, como funcionarios electorales, y que se rijan por los principios rectores de la función electoral.

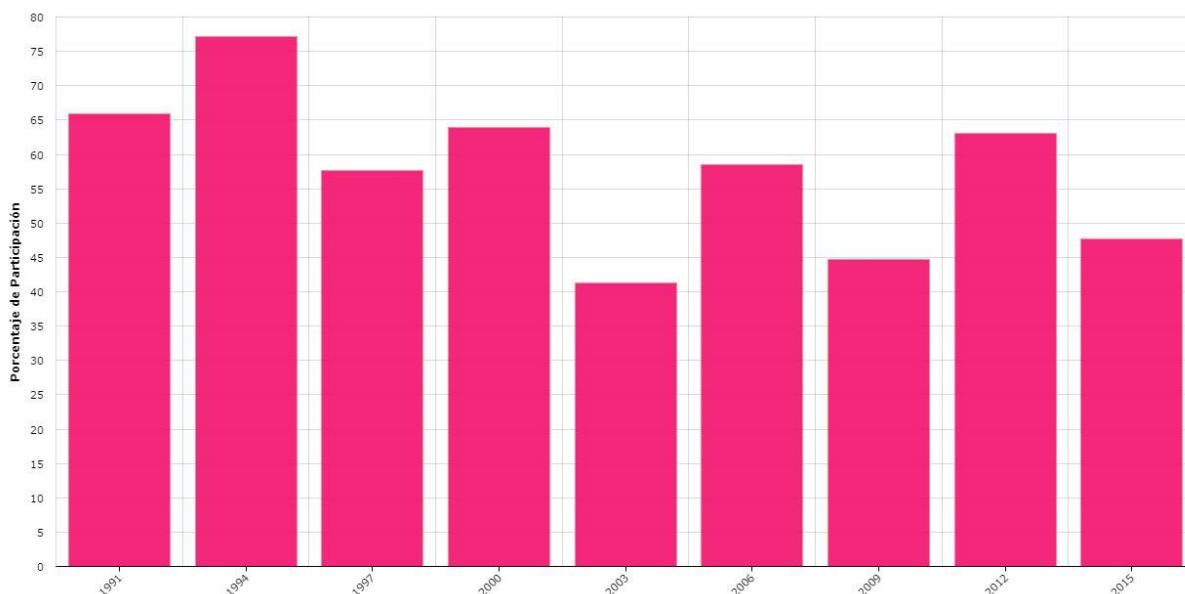
Expuesto lo anterior, es importante mencionar que la educación cívica es una de las funciones que se encuentran inmersas en ambos ámbitos de competencia, es decir, la federal y la local, es por ello que el legislador en todo caso, al implementar la Reforma Político Electoral del año 2014, dejó de lado la importancia del fortalecimiento de la Educación Cívica, en virtud de que de vital importancia contar con un electorado que cuente con un conocimiento pleno de sus derechos y obligaciones dentro de la soberanía nacional, con ello se incrementa el número de participación en actividades de índole electoral, una correcta integración de las mesas directivas de casilla, así como una

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (52)

participación ciudadana en las urnas que supere un 60 o 70%, lo cual daría como resultado la legitimación de la elecciones en nuestro país. Lo cual evidentemente con estas reformas no será una realidad en unos cuantos años.

Ahora bien, la función de los OPL, es de vital importancia al incrementar las actividades que fortalezcan la educación cívica, actividad que debe de ir de la mano con las acciones empleadas con el INE, este tipo de coordinación se debe de reforzar, fijándose como objetivo principal la adecuada difusión de los valores cívicos, de una adecuada cultura de la democracia en nuestro país, esta parte vital para la democracia en México debe de ser prioridad, porque debemos de tomar en cuenta que ante la ausencia de participación no vivieron en plenitud un estado democrático.

Para robustecer lo antes expuesto sirven de referentes las siguientes graficas:



En lo que respecta a la capacitación electoral, si bien es cierto el INE cuenta con presencia en todo el estado por medio de sus Juntas Distritales, lo cierto es que cada una de las elecciones cuenta con características diferentes, desde la demarcación geográfica, integración de los Distritos en razón de la conformación de los municipios que lo integran,

el factor de la intensidad de las elección, el apasionamiento que representa una elección municipal, lo relativo a las comunidades indígenas, en fin un sin número de factores de los cuales los OPL ante la continuidad de organizar dichas elecciones cuentan con la experiencia suficiente para orientar los trabajos necesarios con la finalidad de llevar unas elecciones con el menor número de incidentes, porque tratándose de elecciones siempre habrá incidentes con los cuales lidiar.

Es por las razones expuestas, la existencia de los OPL es fundamental en la organización de las elecciones en nuestro país, a pesar de que el origen de la Reforma Electoral del año 2014 era la de suprimir a estos entes.

ASPECTO JURÍDICO DE LA REFORMA ELECTORAL.

En el presente apartado se analizará desde el punto de vista legal los alcances de la Reforma Electoral del año 2014, además se hará un comparativo con las acciones implementadas por el Consejo General del INE, en este experimento que surgió en el año 2015, con las elecciones concurrentes entre el INE y los OPL.

Como ya se sabe, el día 10 de febrero del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de nuestra Carta Magna.

El día 23 de mayo de 2014, entra en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Derivado de lo anterior se observan diversas consideraciones en la Ley General, como lo son las atribuciones de las autoridades electorales.

Ahora bien, dentro de las atribuciones conferidas por la Ley al INE, están las siguientes:

Artículo 32.

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

- I La capacitación electoral;
 - II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;
 - III. El padrón y la lista de electores;
 - IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
 - V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y
 - VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
- b) Para los procesos electorales federales:
- I. El registro de los partidos políticos nacionales;
 - II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;
 - III. La preparación de la jornada electoral;
 - IV. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 - V. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;
 - VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales;
 - VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;
 - VIII. La educación cívica en procesos electorales federales, y

IX. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

- a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;
- b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales;
- c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera;
- d) La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución;
- e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;
- f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los términos de esta Ley;
- g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento;
- h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;
- i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y

j) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables..²

Como podemos observar, son diversas las funciones que con motivo de la reforma realiza el INE, en relación a las elecciones locales, la principal es el tema relacionado con la capacitación y la integración de las mesas directivas de casilla.

Tomando en consideración lo anterior, en lo que respecta a la integración de las mesas directivas de casilla, el INE a través del Registro Federal de Electores, es la autoridad facultada para realizar la insaculación, tomando en consideración que es esta quien cuenta con toda la información del Padrón Electoral y Lista Nominal, al estar estos dos bajo su resguardo son quienes tienen la potestad de manipular dichos elementos; al ser esto así, el INE cuenta con las herramientas necesarias para realizar un adecuado control de los ciudadanos que podrán participar como integrantes de las mesas directivas de casilla.

Sin embargo, esto no fue suficiente para los Partidos Políticos, ya que la reforma en mención, se establece que el INE realizará todo aquel procedimiento para la insaculación de los ciudadanos, así como la capacitación y la integración de las mesas directivas de casilla, dejando a los OPL, fue de estas atribuciones, lo cual dicho sea de paso, no tiene injerencia directa en el Proceso Electoral, lo que sí es a forma en la cual se realiza la capacitación, y como se ha dicho anteriormente que el ciudadano cuente con la calidad moral y cívica de poder realizar esta labor con toda la responsabilidad posible, que ya se ha mencionado anteriormente, es la parte que más dificulta el actuar de la democracia en México.

Ahora bien, el día 07 de septiembre del año en curso, en sesión del Consejo General del INE, se aprobó en lo general, por mayoría de 9 votos, el Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones, con el voto en contra de los Consejeros A. Pamela San Martín Ríos y Valles y José Roberto Ruíz Saldaña.

El Reglamento aprobado por el Consejo General, en su artículo primero establece lo siguiente:

² Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (13)

*“El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas”*³

En este sentido, es importante mencionar que el presente reglamento lo que pretende es incluir procedimientos y normas que no fueron contempladas en la Reforma a la que hacemos referencia, tanto en la Constitución Política, como en la Ley General, es por ello el origen del presente reglamento, pero analicemos con detalle lo que se pretende rescatar del presente ordenamiento aprobado por el Consejo General.

En primer término, es importante señalar que el Reglamento antes mencionado no cuenta con la legitimación para establecer ordenamientos a los OPL, es decir, la Constitución Federal dota de autonomía a los estados para que estos establezcan las leyes en las materias de acuerdo a régimen interior, sin contravenir a lo que ordena la Constitución. Para mayor esclarecimiento de lo anterior me permito citar el presente artículo Constitucional:

*Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.*⁴

En este orden de ideas, cada uno de los Congresos Locales contó con un plazo establecido para homologar las constituciones de sus Estados, con la finalidad de que estos sean acordes a lo establecido en las Carta Magna, en lo que respecta a la materia electoral.

En el año 2015, año en el que se efectuó la prueba piloto de la Reforma Constitucional del 2014, se celebraron diferentes elecciones, entre las Federales que estas fueron con la finalidad de Renovar al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, para pasar por diferentes estados en los que se realizaría la contienda electoral para elegir a Gobernador,

³ Reglamento de Elecciones, Consejo General INE 07 de septiembre de 2016.

⁴ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (45)

Diputados y Ediles de las diversas Entidades Federativas, en este ejercicio se llevó a cabo el procedimiento novedoso de la Casilla Única y se contaba con un elemento innovador que sería la figura de las candidaturas independientes.

En este marco de Reformas, nuevas figuras que participarían en un proceso electoral, el cual se puede decir que se desarrolló sin mayores incidentes.

Ahora bien, me permito retomar las palabras de la Consejera Electoral San Martín Ríos y Valles, en el texto que elaborará como Voto Particular respecto del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral⁵, que en la parte medular dice:

“ La decisión anterior implicó la emisión de un número considerable de acuerdos y lineamientos tanto para regular el ejercicio de las atribuciones propias del Instituto en los procesos electorales locales, como aquéllas conferidas a los OPL. En muchos casos, aquéllos fueron emitidos ya avanzados los procesos electorales. Lo anterior, considerando que fue necesaria la construcción de reglas y procedimientos detallados que permitirán un adecuado desarrollo de los procesos electorales en curso.”

Es decir, en el año 2015, se observaron diversas deficiencias en la implementación de la Reforma de mérito en los Procesos Electorales Locales, razón por la cual el INE de vio en la necesidad apremiante de realizar adecuaciones sobre la marcha, en la cual evidentemente se observa que no se previeron las situaciones en cuanto a establecer adecuadamente los criterios con los que funcionarían las autoridades Electorales Locales.

No se prevé en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las funciones claras y concisas de la vinculación entre el INE y los OPL, esto es así porque no se ve desde una perspectiva organización de las necesidades de un proceso electoral.

⁵ Voto Particular que emite la Consejera Electoral Lic. A. Pamela San Martín Ríos y Valles, respecto del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. (5)
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-07/CGex201609-07-ap7_VotoParticular.pdf

Para robustecer lo antes mencionado, me permito citar de nueva cuenta a la Consejera Electoral Pamela San Martín⁶, que en la parte que nos interesa dice:

“No obstante, la LGIPE se plantea con una óptica federal y no nacional. Es decir, contiene una regulación amplia del proceso electoral federal, no así de los procesos electorales locales –ni siquiera en lo que hace a las atribuciones que, con motivo de los mismos, corresponden al Instituto–; dicho de otro modo, en la misma no se desarrolla la forma en que se llevarán a cabo las facultades nacionales del INE respecto de procesos electorales locales, pues las mismas sólo están referidas a los procesos electorales federales y no hay una regulación clara respecto de los procesos electorales locales, coincidentes o no.”

Si esto es así, se puede apreciar una evidente falta de coordinación entre autoridades electorales, al no saber específicamente cuales son las funciones que le atribuyen a cada ente, lo que genera inestabilidad en la toma de decisiones, lo cual no dota de certeza en la organización de Procesos Electorales Locales.

Pero no es de alarmarse y pensar en una nueva reforma político electoral, se está trabajando en ello y prueba está en el Reglamento de Elecciones recientemente aprobado, sin embargo desde el punto de vista jurídico tiene sus deficiencias y es importante contar con los mecanismos necesarios para subsanar esas deficiencias en los ordenamientos emitidos por el INE y que estos no trasgredan la autonomía de las Entidades Federativas.

En el análisis del presente reglamento de elecciones, tomando en consideración que se aprobó recientemente y este prevé diversas normas que deberán acatar los OPL, considero que forma parte integral del presente análisis, tomando en consideración que es una de las medidas adoptada por el Instituto Nacional Electoral para subsanar ciertas deficiencias que fueron resultando del desarrollo de dos años en lo que se llevaron a cabo procesos electorales como lo fue el año 2015, en la que existieron elecciones coincidentes y las elecciones realizadas en diferentes estados en el año 2016. Es por ello que derivado de la aprobación

⁶ Voto Particular que emite la Consejera Electoral Lic. A. Pamela San Martín Ríos y Valles, respecto del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. (5)
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-07/CGex201609-07-ap7_VotoParticular.pdf

del reglamento en mención, este forma parte del análisis que se puede realizar de acuerdo a las reflexiones en torno a la reforma electoral, toda vez que este ordenamiento es origen de la modificación a la constitución. Como ya se ha mencionado anteriormente las actividades interinstitucionales quedan sueltas en lo que respecta a la parte operática y técnica del funcionamiento de un proceso electoral, toda vez que cada una de las experiencias vertidas en un proceso electoral modifican sustancialmente la óptica de lo que puede o no debe de hacer la autoridad electoral.

Continuando con el análisis del Reglamento es importante señalar lo que expone el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, en su Voto particular que emite respecto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, al citar diversos criterios de la corte como lo son los siguientes:

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.

La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano

facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competará, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición⁷.

Así como la diversa que reza:

SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO.

La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden

⁷ "FACULTAD REGLAMENTARIA SUS LIMITES Época: Novena Época Registro: 172521 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 30/2007 Página: 1515

válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal; por consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal exegética, que de manera sistemática armonice los preceptos relativos, frente a una interpretación puramente literal que soslaye una adecuada integración jurídica y se desentienda de la supremacía de las normas, de la cual depende precisamente la validez de las mismas, por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema razón de validez del orden jurídico. En tal virtud, la validez de la supletoriedad de una ley, lógica y jurídicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y menos aún a las disposiciones de un acuerdo general de orden administrativo, así como tampoco puede contrariar los principios generales que emergen de las normas legales, máxime cuando en relación con un punto o materia determinada, la propia Ley Suprema del país expresamente establezca que deba estarse a los términos de la ley, como acontece en tratándose de la impugnación del no ejercicio de la acción penal a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 21 de la Carta Magna; y siendo así, las disposiciones de los numerales 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el titular de esa institución, que establecen que el querellante u ofendido tiene derecho a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal en un término de diez días contados a partir de su notificación, no pueden prevalecer respecto del artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que previene que los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación, por lo que en orden a su superior jerarquía, debe estarse a esta regla establecida en la invocada ley procedimental.⁸

⁸ Época: Novena Época Registro: 185878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002 Materia(s): Penal

El Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, cita al Doctor Gabino Fraga⁹ señalando que la teoría del origen lega de la competencia sostiene que sólo por virtud de una ley se puede hacer la distribución de facultades entre los órganos de la Administración. El fundamento de esa teoría descansa en los elementos mismos que fundan el principio de legalidad.

Como ya se ha hecho referencia en párrafos anteriores, no contar con los ordenamientos necesarios para la adecuada función electoral traería con ello un resultado negativo al vulnerar el principio de legalidad, ahora bien, no se trata solamente de elaborar reglamentos con la finalidad de subsanar lo que no está contemplado en la Ley, sino que estos deben de ir acorde con la substancia de la norma, es decir, son violentar lo que el legislador plasmó en cada una de las leyes, es decir sin violentar la esfera de competencia de cada autoridad y sobre todo respetando la autonomía con la que cuenta cada uno de los órganos electorales en el país.

Si bien es cierto, el Instituto Nacional Electoral cuenta con la obligación de supervisar, coordinar y reglamentar cada uno de los actuantes de cada órgano electoral, lo cierto es que cada Entidad Federativa cuenta con su reglamentación la cual ya ha sido homologada a lo que establece la Constitución, sin embargo el INE no debe de omitir que dentro de la esfera de su competencia este puede actuar. Es primordial la expedición de reglamentos y normas que nos permitan un buen funcionamiento de la organización de los procesos electorales, pero esto debe de ser en conjunto con los OPL, de cada Estado, que se establezca una verdadera vinculación entre cada uno de los órganos electorales del país con el único fin de dotar a este país de un sistema electoral funcional, con un sistema democrático pleno, con autoridades electorales que permitan dar certeza a los ciudadanos que los derechos político electorales están resguardados en cada actuar de los funcionarios que integran estos organismos, que den al pueblo mexicano la seguridad que se trabaja para un bien común y no para el de unos cuantos.

⁹ Fraga Gabino, Derecho Administrativo, 40ª Edición, Editorial Porrúa, México 2000,p.124

La función de los OPL, es vital para la vida democrática del país, es por ello que el INE, dentro de su ámbito de competencia, deberá de dotar de los elementos necesarios para un adecuado funcionamiento de los mismos, pero esto no quiere decir que vaya más allá, que se establezca una vinculación entre las autoridades que permitan un buen funcionamiento.

Autor: Mtro Jhonathan René Durand Salas.

Grado: Maestría en Derecho Procesal.

Adscripción: Particular

Correo: jr_550@hotmail.com